

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA DE FAMILIA

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

Magistrados: CARLOS ALEJO BARRERA ARIAS (PONENTE)
NUBIA ÁNGELA BURGOS DÍAZ
JAIME HUMBERTO ARAQUE GONZÁLEZ

**REF: ACCIÓN DE TUTELA DE ANA GRACIELA TORRES MORENO Y
OTRO EN CONTRA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
(IMPUGNACIÓN).**

Proyecto aprobado en sesión virtual de 8 de octubre de 2021, en atención a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura, ante la declaratoria de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19.

Resuelve la Sala la impugnación interpuesta en contra de la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2021, proferida por el Juzgado 16 de Familia de esta ciudad, dentro del asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

Los señores ANA GRACIELA TORRES MORENO y JORGE ELIÉCER ROJAS RODRÍGUEZ presentaron acción de tutela en contra del señor Superintendente Financiero, para que se les ampararan sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, al libre acceso a la administración de justicia y el de petición, en vista de que la entidad no ha dado respuesta, de fondo y completa, a la solicitud que ellos presentaron, el 27 de mayo de 2021, en orden a que se iniciara una investigación administrativa en contra del Banco BBVA y de BBVA Seguros, por las irregularidades que cometieron en el cobro de unos créditos hipotecarios que están en cabeza suya, pues desconocieron unas cláusulas y los amparos que tenían los seguros de vida del grupo de deudores, que ellos adquirieron, engañando a los operadores judiciales que conocieron del proceso ejecutivo hipotecario que, en su contra, promovieron las entidades mencionadas. Agregan que no ha sido posible que BBVA les entregue copia completa de las cláusulas de las pólizas de seguros que ellos suscribieron, en las que se cubría “el amparo de desempleo”.

Notificado, el extremo pasivo se opuso a las pretensiones de los actores; igualmente, se dispuso la vinculación de los señores Jueces 37 Civil del Circuito y 56 Civil Municipal, ambos de esta ciudad, representantes legales del Banco BBVA y de BBVA Seguros y, luego de agotado el trámite correspondiente, el juez de primera instancia accedió a la concesión del amparo pedido y ordenó a los dos últimos y al Superintendente Financiero que “(i) expidan copias a los accionantes, del Contrato de la Póliza: VGDB Nro. 1 CERTF: 196874, del 1° de enero de 2016, su fecha de creación, fecha de terminación, las fechas en se (sic) incluyeron en dicha póliza, a Ana Graciela Torres y Jorge Eliecer Rojas Rodríguez, con relación a los créditos No. MO2630000000011379600167680 y 00130137329600175642 y los anexos con sus renovaciones, donde se modificó, adicionó o canceló alguna cobertura o amparo, según la declaración de la entidad BBVA SEGUROS a la solicitud de pago del amparo de desempleo, presentado por Ana Graciela Torres. (ii) les expida copia completa del Contrato de la póliza Seguro Vida Deudor Número 021050001322844 y Seguro Vida Deudor Número 021050001391087, Su fecha de creación, las fechas en se (sic) incluyeron en dicha póliza, Ana Graciela Torres y Jorge Eliecer Rojas Rodríguez, con relación a los créditos No. MO2630000000011379600167680 y 00130137329600175642. (iii) en el evento de existir reserva legal para expedición de dichas copias, se les debe informar en forma motivada las razones legales de la eventual reserva, y los recursos oponibles al respecto (iv) expedirle copias de los documentos, en cuanto estos se encuentren libres de reserva, dirigiéndolos a la dirección física o virtual que registre (sic), todo lo anterior debe cumplirse en el citado termino, acreditando al despacho el acatamiento de esta decisión, conforme a las razones legales anotadas”, decisión con la que se mostraron inconformes los accionantes y la impugnaron, recurso de que conoce esta Sala y que se desata a continuación.

CONSIDERACIONES

En el artículo 86 de la Constitución Nacional se prescribe que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar, ante los jueces, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que los mismos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

En el caso presente, la acción se dirige en contra del señor Superintendente Financiero, funcionario público que, dado este carácter, puede ser sujeto pasivo de la misma.

En torno al derecho de petición tiene dicho la jurisprudencia:

“La Constitución alude a la ‘pronta resolución’ de las peticiones presentadas significando con ello que no sólo la ausencia de respuesta vulnera el derecho de petición, la decisión tardía también lo conculca. La ley consagra términos dentro de los cuales la autoridad debe proceder a estudiar la petición y a decidir sobre ellos (sic). El Código Contencioso Administrativo, en su artículo sexto, prevé un término de quince (15) días, empero, puede acontecer que en razón de la complejidad del asunto o por motivos de diverso orden no sea posible resolver oportunamente, en esa hipótesis, de acuerdo con la norma citada, la administración debe informarlo así al solicitante indicándole los motivos y señalándole el término que utilizará para dar contestación. La Corte Constitucional ha acotado que aun cuando no se determina ‘cuál es el término que tiene la administración para contestar o resolver el asunto planteado, después de que ha hecho saber al interesado que no podrá hacerlo en el término legal, es obvio que dicho término debe ajustarse a los parámetros de razonabilidad, razonabilidad que debe consultar no sólo la importancia que el asunto pueda revestir para el solicitante, sino los distintos trámites que debe agotar la administración para resolver adecuadamente la cuestión planteada’. Como se anotó, la respuesta o decisión de las peticiones para que sea tal debe abordar el fondo de lo pedido... El derecho de petición lleva implícito un concepto de decisión material, real y verdadero, no apenas aparente. Por tanto, se viola cuando, a pesar de la oportunidad de la respuesta, en ésta se alude a temas diferentes de los planteados o se evade la determinación que el funcionario deba adoptar.

“La decisión, una vez tomada, debe trascender el ámbito de la administración y ser puesta en conocimiento del particular, mediante la utilización de los medios que el ordenamiento jurídico contempla para ese efecto. Lo resuelto tiene un claro destinatario y la autoridad no cumple con su obligación de resolver guardando para sí el sentido de lo decidido. Al peticionario le asiste el derecho de conocer la respuesta y, si es del caso, de controvertirla utilizando los respectivos recursos” (Corte Constitucional, sentencia T-134, 29 de marzo de 1996, Exp. T-85.444, T-85.504 y T-85.506. M.P.: doctor VLADIMIRO NARANJO MESA).

La inconformidad de los actores se afina en que debió ordenarse a los demandados que se expida, también, copia del contrato de la póliza No. 0110043; igualmente que debió “declararse” el silencio administrativo positivo del Banco BBVA y en favor de ellos, por no contestar la solicitud que le hicieron, el 4 de mayo de 2021 y, finalmente, que se ordene a la Superfinanciera remitir copia de las contestaciones que

el Banco BBVA y BBVA Seguros allegaron dentro del traslado de la queja que les hizo esa entidad.

Pues bien: en lo que tiene que ver con la configuración del silencio administrativo positivo debe señalarse que el mismo solo opera para la administración y en los casos previstos expresamente en las disposiciones legales, para cuya protocolización existe un procedimiento (arts. 84 y 85 del C.P.A.C.A.), de modo que si los actores encuentran que, en el caso presente, se dan los presupuestos para ello, es a esa vía ordinaria a la que deben acudir y no a este mecanismo excepcional de protección de los derechos fundamentales.

Ahora en lo relacionado con que se ordene a la Superfinanciera remitir copia de las contestaciones que, dentro del trámite administrativo de la queja que fue presentada ante esa entidad, hicieron el Banco BBVA y BBVA Seguros, es una solicitud que debe hacerse, inicialmente, al interior de dicho asunto, para que la misma, teniendo en cuenta la normatividad prevista para ese procedimiento, decida sobre el particular.

Finalmente, en lo atinente a la expedición de la copia del contrato de póliza No. 011043, debe sentarse que si bien BBVA Seguros indicó que “el seguro No. 0110043 corresponde a la póliza de vida grupo deudores global contratada por la Entidad Financiera BBVA Colombia S.A. y cuyo tomador es la misma Entidad, de la cual se desglosan los seguros a nombre de cada cliente que adquiere una obligación bancaria, lo anterior como consecuencia del proceso licitatorio adelantado por el Banco. Adjuntamos copia del certificado para su validación”, lo cierto es que no señaló por qué no se expedía copia de la póliza, teniendo en cuenta que de la misma se desglosaron los seguros a nombre de los actores, razón por la cual se adicionará el fallo apelado, para que se expida también copia de la póliza del seguro No. 0110043, sin más consideraciones, por no ser ellas necesarias.

En mérito de lo expuesto el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C., EN SALA DE FAMILIA DE DECISIÓN, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE

1º.- ADICIONAR el ordinal 1º del fallo apelado, esto es, el de fecha 16 de septiembre de 2021, proferido por el Juzgado 16 de Familia de esta ciudad, dentro del

asunto de la referencia, para ordenarle a los señores representantes legales del Banco BBVA y de BBVA Seguros que, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación que se les haga de este fallo, expidan copia de la póliza del seguro No. 0110043, que corresponde a la póliza de vida grupo deudores global contratada por BBVA Colombia S.A. y cuyo tomador es la misma entidad, la cual deberá ser remitida a la dirección informada por los actores, para esos efectos.

2º.- **CONFIRMAR**, en todo lo demás que fue objeto del recurso, el fallo impugnado.

3º.- **NOTIFÍQUESE**, por el medio más expedito, a todos los interesados, lo aquí decidido, excepto a los señores Superintendente Financiero y representantes legales del Banco BBVA y de BBVA Seguros, a quienes se ordena hacerlo mediante oficio, adjuntándoles copia de esta providencia.

4º.- Cumplido lo anterior, remítase el expediente a la H. Corte Constitucional, para la eventual revisión de esta sentencia.

CÓPIESE Y CÚMPLASE



CARLOS ALEJO BARRERA ARIAS

Magistrado



NUBIA ÁNGELA BURGOS DÍAZ

Magistrada



JAIME HUMBERTO ARAQUE GONZÁLEZ

Magistrado

ACCIÓN DE TUTELA DE ANA GRACIELA TORRES MORENO Y OTRO EN CONTRA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA (IMPUGNACIÓN).